

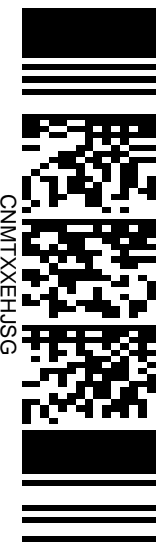
Puerto Montt, ocho de julio de dos mil veintidós.

Vistos.

En autos laborales sobre nulidad de despido, despido injustificado, indemnización de perjuicios por lucro cesante y cobro de prestaciones laborales, tramitados con el RIT O-488-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, Rol de ingreso de Corte Laboral-Cobranza N°506-2021, comparece el abogado Mauricio Alejandro Barría Mena, en representación de la demandada Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, quien interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno de dicho tribunal, que acogió parcialmente la demanda de nulidad del despido, despido injustificado, lucro cesante y cobro de prestaciones laborales.

Funda su recurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Señala infringidos el artículo 4° de la Ley N°18.883 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y los artículos 1°, 7°, 8° y 9° del Código del Trabajo

Sostiene que la causal de nulidad se verifica desde un triple punto de vista, a saber: A.- contravención a la ley, respecto de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°18.883. B.- falta de aplicación del artículo 1° del Código del Trabajo y C.- aplicación indebida del artículo 7°, 8 y 9 del Código del Trabajo. Respecto de la norma consignada en la letra (A), asegura que una correcta aplicación de ésta necesariamente debe concluir que la relación que unía a las partes era de carácter estatutaria, enmarcándose en la regulación establecida en el artículo 4° de la Ley 18.883 bajo la condición o hipótesis de cometidos específicos. Debido a ello, correspondía aplicar (B) el artículo 1° del Código del Trabajo, considerando que el trabajador no se encontraba en la contraexcepción del artículo 1° inciso 3° del Código del Trabajo toda vez que, la contratación y su término se encontraban reguladas por Estatuto Especial. En tercer lugar, estima que para calificar la relación de carácter laboral nunca existió la posibilidad, en derecho, de aplicar la normativa en comento a la relación sostenida entre las partes que, como se advierte, se encuentra regulada por un estatuto especial.



Luego de argumentar en torno a la influencia sustancial de la infracción en lo dispositivo del fallo, pide se invalide la sentencia y se dicte la sentencia de reemplazo que corresponda con arreglo a derecho y al mérito del proceso, declarando que no existió relación laboral entre las partes, y en consecuencia de aquello, se rechacen las prestaciones económicas de feriado legal proporcional, indemnización sustitutiva del aviso previo y remuneraciones por los meses de septiembre y octubre de 2020 a título de lucro cesante.

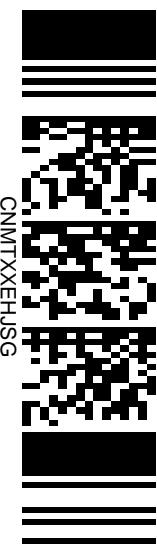
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que previo al análisis de cada causal en particular, es necesario recordar que el recurso de nulidad en materia laboral es de derecho estricto y para que una sentencia sea anulada no basta con disentir de ella, sino que necesariamente, el vicio que se reclama debe ceñirse estrictamente a las causales contempladas en la ley, explicando de una manera precisa y clara la manera en que el vicio alegado se configura.

Que, en particular, respecto a la causal invocada, la del artículo 477 del Código del Trabajo, busca anular la sentencia definitiva en los casos en que ha sido pronunciada con infracción de ley que ha influido sustancialmente en el fallo y, como se ha resuelto reiteradamente por esta Corte, la referida causal implica que la ley en cuestión se ha aplicado a casos no regulados por la misma, no se ha aplicado a los casos regulados específicamente por ella o, habiéndose aplicado, no lo ha sido en forma correcta, pero en todas estas situaciones sin alterar en nada los hechos establecidos en la sentencia recurrida.

SEGUNDO: Que, para una adecuada contextualización de los hechos y apropiada resolución del recurso, conviene señalar que el recurrente plantea la causal de nulidad, del artículo 477 del Código del Trabajo, y señala que dicha infracción de ley se encontraría en el razonamiento el juez a quo, expresado en los considerandos séptimo a decimoquinto.

Que, de dichas conclusiones quedaría en evidencia la infracción a los artículos 4º de la Ley 18.883 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y los artículos 1º, 7º, 8 º y 9º del Código del Trabajo; en específico



declara que *“el Juez de primera instancia, manteniendo la totalidad elementos para aplicar correctamente el artículo 4° de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, decide omitir la aplicación del estatuto especial, prescindiendo de la calificación de “cometidos específicos” para calificar la relación como laboral en los hechos asentados en el considerando “quinto” números 1°, 2° y 3° principalmente”*.

Previas citas jurisprudenciales, en el sentido de su pretensión, expone el recurrente que la causal de nulidad se verifica desde tres puntos de vista:

A.- Contravención a la Ley, respecto de lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley 18.883, por cuanto *“la aplicación armónica y coordinada”*, llevaría aplicar el artículo 1° del Código del Trabajo;

B.- Esta falta de aplicación del artículo 1° del Código del trabajo consiste en que el trabajador no se encontraba en la contra excepción del artículo 1° inciso 3° de dicho artículo, *“toda vez que, la contratación y su término se encontraban reguladas por Estatuto Especial, y por ello, no era posible aplicar la normativa laboral en estudio”* y;

C.- Consecuencialmente aplicación indebida del artículo 7°, 8 y 9 del Código del Trabajo, consistió en calificar la relación de carácter laboral, dado que *“nunca existió la posibilidad, en Derecho, de aplicar la normativa en comento a la relación sostenida entre las partes que, como se advierte, se encuentra regulada por un estatuto especial”*.

Conforme su teoría del caso, la aplicación errónea que pretende sea declarada por esta Corte, influye en lo dispositivo del fallo, por cuanto *“de haberse aplicado correctamente las disposiciones establecidas en los artículos 4 ° de la Ley 18.883 y los artículos 1°, 7°. 8° y 9° del Código del Trabajo, necesariamente se habría concluido que, la relación que unía a las partes era una relación a “honorarios”, y en ningún caso, le resultaban aplicables las disposiciones del Código del trabajo”*.

TERCERO: Que, por su parte, versa la sentencia impugnada sobre la interpretación que debe darse a la normativa específica a fin de determinar la existencia de una relación laboral o de un contrato de honorarios.



En ese sentido, el juez sentenciador establece que las situaciones y condiciones a considerar para entender la existencia de una relación civil, bajo contrato de honorarios, son las siguientes:

“**Noveno:** Que de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 4, la Administración podrá contratar sobre la base de honorarios en tres casos.

1.- A Profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, en la medida que se requieran para realizar labores que cumplan con las características de **accidentales y no habituales** de la institución.

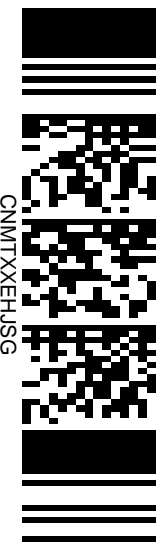
2.- A Extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera, que debe hacerse del mismo modo anterior; y

3.- Cuando requiera la prestación de servicios para **cometidos específicos**.

Décimo: Que de lo reseñado en el considerando anterior se colige que para verificar si la contratación del demandante se encuentra dentro del marco legal que establece el artículo 4 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales debemos atender entonces a la forma en que se prestaron los servicios, el tipo de servicios prestados y en particular, su especificidad y temporalidad”.

CUARTO: Que, conforme a pronunciamiento de esta Corte, en materia similar, se debe tener presente que, *“la controversia ... se centra en determinar si la modalidad bajo la cual la actora fue contratada por la I. Municipalidad de Puerto Montt era de carácter laboral o de un contrato de honorarios regido por el artículo 4 de la Ley 18.883, lo que determina el régimen jurídico aplicable, ya que lo discutido en este recurso es la decisión del tribunal a quo, el que luego de analizar los hechos y normas jurídicas aplicables, concluyó que la relación jurídica entre las partes era un contrato de trabajo y no un contrato de honorarios enmarcado en el artículo 4 de la Ley 18.883, por lo que corresponde dilucidar cuál es la naturaleza de la relación jurídica entre las partes”* (Sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, Rol Ingreso Corte N°111-2020).

Asimismo, cabe indicar que el propósito de este recurso, dice relación con fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se han tenido por probados, por lo que es relevante lo asentado por la sentencia, en virtud de las probanzas rendidas.



Al efecto, para analizar la aplicación de la ley en el caso particular, y, no siendo posible alterar los presupuestos fácticos que dieron lugar a la decisión, cobra capital importancia los hechos asentando que fundan la decisión, contenidos en el considerando undécimo, de acuerdo a lo siguiente:

“Undécimo: Que como quedara asentado en el considerando quinto, la Municipalidad de Puerto Montt, contrató al demandante a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario en el marco del modelo de intervención para personas en situación de calle, denominado como “Programa Noche Digna”, componente: Plan de invierno para las personas en situación de calle, año 2020 albergue 24/7.

También quedó establecido que el demandante tenía, entre otras funciones, asistir a las reuniones técnicas informativas, de coordinación y evaluación a las que se le convoque, velar por la realización adecuada de las actividades con participantes y otras instituciones u organismos externos, responsable del orden, ambiente, cordialidad en los comedores a la entrega de las cenas y desayunos,

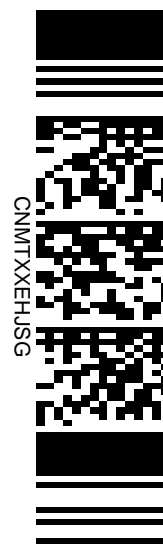
recepcionar, registrar administrativamente y distribuir a los usuarios en los dormitorios, apoyar al encargado en las distintas actividades e iniciativas grupales, así como también en realizar intervenciones individuales y grupales en situación de crisis y conflictos que se puedan presentar, entregar y sugerir al responsable del programa indicaciones que va en provecho de la administración del albergue 24/7.

Se dejó asentado, además, que la prestación de servicios debía efectuarse en dependencia del Instituto Nacional del Deporte calle maratón esquina Egaña, en Puerto Montt, cumpliendo un horario de trabajo y sujeto a un sistema de turnos dispuesto por la municipalidad demandada, destacándose que el contrato era ejecutado bajo la supervisión de la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario o subrogante legal.

También se estableció que se le reconoció al demandante el derecho a ausentarse de sus funciones producto de licencia médica, cancelándose la diferencia de los días que no queden cubiertos por el subsidio de incapacidad, para lo cual debía presentar ante el servicio dentro de las 72 horas siguientes contadas desde el inicio del reposo la correspondiente licencia médica en original.”

QUINTO: Que, el juez a quo funda la aplicación de la norma hoy en discusión, elaborando la interpretación sobre la permanencia de las funciones asignadas al demandado, conforme a los objetivos de la Municipalidad, conforme expone en sus considerandos décimo cuarto y décimo quinto:

“Décimo Cuarto: Que al ser funciones propias, habituales y permanentes de la Municipalidad demandada ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que se trate de una relación contractual



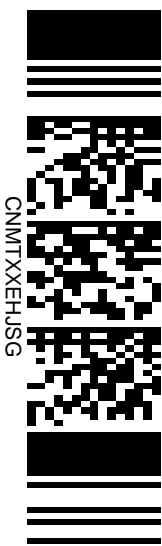
amparada por la norma aludida, resultando irrelevante lo señalado por el testigo don Mario Almonacid Paredes, en cuanto a que la ejecución del Programa se haya realizado vía transferencias de recursos de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, pues tal circunstancia le es inoponible al actor.

Décimo Quinto: Que, así las cosas, no enmarcándose la relación contractual dentro del régimen especial que contempla la Ley 18.883, debe concluirse que su contratación lo ha sido al margen de la legalidad. La ilegalidad de la actuación de la administración acarrea sin duda la nulidad de los actos o contratos, sin embargo, no es posible aplicar el efecto normal de la nulidad tratándose de prestación de servicios realizados a través del tiempo, en provecho de la administración y de buena fe por el funcionario. Entonces, surge la necesidad de aplicar un cuerpo normativo que permita amparar la prestación de servicios, el que no es otro que el Código del Trabajo, como lo establece el artículo 1 del mismo cuerpo legal, y que consagra dichas normas como de carácter general y aplicables supletoriamente incluso a la administración del Estado cuando no existe una norma que regule la situación.

La sola circunstancia que la institución no pueda contratar en virtud de las normas del código del trabajo, no puede ser un motivo para aplicar de manera ilegal un estatuto que atendida las circunstancias de la prestación de los servicios es improcedente; máxime cuando la Administración puede externalizar la prestación de un servicio para cumplir sus fines y objetivos.

En consecuencia, al no tener aplicación el artículo 4 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y concurrir indicios propios del vínculo de subordinación y dependencia, corresponde concluir que entre el demandante y la demandada existió un contrato de trabajo”.

SEXTO: Que, es parecer de esta Corte, que la interpretación de esta norma implica revisar si los presupuestos que contiene el artículo 4° de la Ley 18.883, concurren en la especie, y, por ende, facultan a la Municipalidad para la contratación de personas, bajo la fórmula de honorarios. En ese orden de cosas ha estimado que los dos supuestos normativos específicos son: a) Que se trate de labores accidentales y que no sean las habituales en la municipalidad, y; b) Que sean cometidos específicos, los que podrán o no tener carácter de accidental o no habitual, debiendo aquellos estar claramente determinados en el tiempo y perfectamente individualizados y que excepcionalmente pueden consistir en funciones propias y habituales del municipio, pero siempre limitadas en el tiempo.



SEPTIMO: Que, de acuerdo a los hechos establecidos por el tribunal a quo y reseñados en el considerando cuarto, estos sentenciadores estiman que los servicios prestados por el demandante para la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt fueron prestados en virtud de un contrato de honorarios, bajo la modalidad de cometidos específicos que prevé el artículo 4 de la Ley 18.883, toda vez que aquellos estaban perfectamente individualizados, al consistir en la prestación de servicios dentro del marco del modelo de intervención para personas en situación de calle, financiado vía transferencia de recursos de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, para la ejecución del programa “Programa Noche Digna”, componente: Plan de invierno para las personas en situación de calle, año 2020 albergue 24/7.

Como se evidencia de la propia denominación del programa, dicho plan se encuentra acotado temporalmente, pues comprendía la atención y entrega de alimentación a las personas en situación de calle, en la época invernal, sujeto entonces a un límite temporal, financiado con recursos provenientes de un órgano público, no siendo aquellos servicios labores habituales ni propias del municipio, sino que éstas fueron asumidas a fin de dar cumplimiento al programa antes dicho, quedando además claramente establecido en el contrato, que indicaba el plazo por el cual se contrariaron los servicios, esto es, desde el 1 de junio de 2020 al 31 de octubre de 2020, es decir, circunscrito al invierno del mismo año.

Por ello, no puede estimarse que estos servicios hayan sido permanentes, dado que tenían una duración temporal y acotada, limitada y sujeta al período ya señalado.

Que se establecieran como hechos de la causa, elementos que sirvieran de base para considerar la existencia de una relación laboral, tales como: las dependencias del Instituto Nacional del Deporte para cumplir funciones, cumplir un horario y sujeto a un sistema de turnos dispuesto por la municipalidad demandada, o supervisión de la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario o subrogante no obsta a la existencia de contrato de honorarios, teniendo presente el objetivo del programa y su duración limitada en el tiempo, encuadrándose dentro de la hipótesis de cometidos específicos, dado que en este caso concurren



todos los requisitos para que la relación que vinculó a las partes quede comprendida dentro de esta modalidad de contratación y, por ello regida por las reglas del propio contrato.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo razonado estos sentenciadores estiman que concurre la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo y por ende será acogida, por haberse infringido el artículo 4 de la ley 18.883, en relación con los artículos 1, 7, 8 y 9 del Código del Trabajo, toda vez que las funciones desempeñadas por el actor se encuadran dentro de la hipótesis de cometido específico que prevé esta norma y que permite la contratación bajo la modalidad de honorarios a las municipalidades, rigiéndose la prestación de servicios por las cláusulas del respectivo contrato, no siendo por ello aplicable en el caso sub lite el estatuto laboral.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley 18.883, 1, 7, 8, 9, 474, 477 y 478 del Código del Trabajo, se declara:

Que **SE ACOGE**, el recurso de nulidad deducido por el abogado don abogado Mauricio Alejandro Barría Mena, en representación de la demandada Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, por la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción al artículo 4 de la Ley 18.883, la que se declara nula, debiendo dictar sentencia de reemplazo en este mismo acto, en forma separada y sin nueva vista.

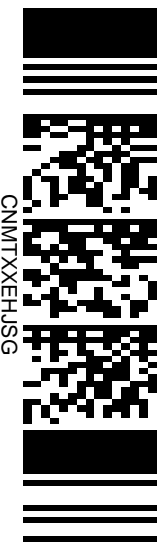
Redacción de la Abogada Integrante doña Margarita Isabel Campillay Caro.

Regístrese y comuníquese.

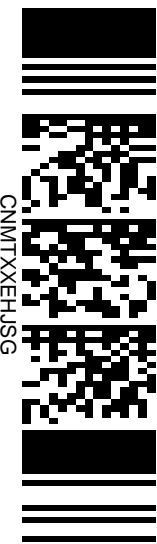
Rol Laboral N°506-2021.

Jorge Benito Pizarro Astudillo
Ministro
Fecha: 08/07/2022 14:49:22

JUAN RONDINI FERNANDEZ-DAVILA
Ministro
Fecha: 08/07/2022 14:49:23

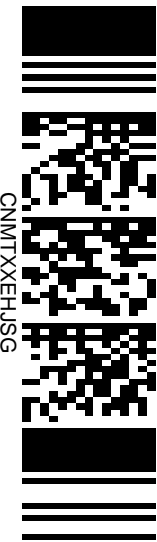


MARGARITA ISABEL CAMPILLAY
CARO
Abogado
Fecha: 08/07/2022 14:49:23



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por los Ministros (as) Jorge Pizarro A., Juan Patricio Rondini F. y Abogada Integrante Margarita Isabel Campillay C. Puerto Montt, ocho de julio de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a ocho de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Puerto Montt, ocho de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, se procede a dictar sentencia de reemplazo en estos antecedentes

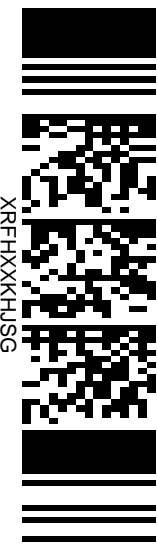
Que se reproduce la sentencia definitiva de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, con excepción de sus considerandos decimotercero a decimoctavo y de la parte resolutive, que se eliminan; y, las motivaciones séptima y octava del fallo de esta corte que invalidó el anterior.

Y se tiene en su lugar presente:

PRIMERO: Que, el artículo 4 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

Que, del tenor de esta norma se desprende que faculta a las Municipalidades para la contratación de personas, bajo la fórmula de honorarios, estableciendo para ello dos supuestos normativos específicos: a) Que se trate de labores accidentales y que no sean las habituales en la municipalidad. b) Que sean cometidos específicos, los que podrán o no tener carácter de accidental o no habitual, debiendo aquellos estar claramente determinados en el tiempo y perfectamente individualizados y que excepcionalmente pueden consistir en funciones propias y habituales del municipio, pero siempre limitadas en el tiempo.



SEGUNDO: Que, tal como se razonó y concluyó en los motivos séptimo y octavo del fallo de nulidad, se estima que los servicios que prestó don Jose Daniel Carcamo Flos, para la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, fueron prestados en virtud de un contrato de honorarios, bajo la modalidad de cometidos específicos que prevé el artículo 4 de la Ley 18.883, toda vez que aquellos estaban perfectamente individualizados, al consistir en la prestación de servicios dentro del marco del modelo de intervención para personas en situación de calle, financiado vía transferencia de recursos de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, para la ejecución del programa “Programa Noche Digna”, componente: Plan de invierno para las personas en situación de calle, año 2020 albergue 24/7, que comprendía la atención y entrega de alimentación a las personas en situación de calle, en la época invernal, el cual estaba sujeto a un límite temporal y era financiado con recursos provenientes de este órgano público, no siendo aquellos labores habituales ni propias del municipio, sino que éstas fueron asumidas a fin de dar cumplimiento a este programa, más aún cuando la duración de los contratos de honorarios celebrados entre las partes se extendió desde el 1 de junio de 2020 al 31 de octubre de 2020, no pueden estimarse que estos servicios hayan sido permanentes, dado que tenían una duración temporal limitada y sujeta al término de dicho convenio.

TERCERO: Que, en consecuencia, al no tener la relación jurídica habida entre las partes la naturaleza de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, al quedar aquella comprendida en la hipótesis de cometidos específicos que prevé el artículo 4 de la Ley 18.883, que permite a las municipalidades contratar a honorarios, dicha relación queda regida por el respectivo contrato de honorarios.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 477 del Código del Trabajo en relación con el artículo 4 de la Ley 18.883 y demás disposiciones citadas, se declara:

I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de nulidad del despido, despido injustificado, lucro cesante y cobro de prestaciones laborales



interpuesta por don José Daniel Cárcamo Flos, en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

II.- Que no se condena en costas a la parte demandante por haber tenido plausible para litigar.

Redactó la Abogada Integrante doña Margarita Isabel Campillay Caro.

Regístrese y comuníquese.

Rol 506-2021

Jorge Benito Pizarro Astudillo
Ministro
Fecha: 08/07/2022 14:49:25

JUAN RONDINI FERNANDEZ-DAVILA
Ministro
Fecha: 08/07/2022 14:49:26

MARGARITA ISABEL CAMPILLAY
CARO
Abogado
Fecha: 08/07/2022 14:49:27



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por los Ministros (as) Jorge Pizarro A., Juan Patricio Rondini F. y Abogada Integrante Margarita Isabel Campillay C. Puerto Montt, ocho de julio de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a ocho de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>